



Isabel Díaz Ayuso, en el centro, en el CPD de Nabiax, en Alcalá de Henares, en septiembre, en una imagen de la Comunidad.

Seis millones de placas solares nutrirán los centros de datos del Eje del Henares

Decenas de municipios del este de la región se ven afectados por extensas plantas fotovoltaicas ante cuya instalación protestan vecinos, colectivos y ecologistas

GUILLERMO MARTÍNEZ
Madrid

Para unos, es una forma de esquilmar los recursos naturales para el beneficio de grandes compañías tecnológicas; para otros, la oportunidad de alcanzar la soberanía digital. La proliferación de centros de procesamiento de datos (CPD) impulsados por el uso masivo de la inteligencia artificial (IA) en la comarca del Henares, en la Comunidad de Madrid, y las miles de hectáreas que ocuparán las placas solares que los abastecerán de energía —expropiaciones de terreno a particulares mediante— sulfura a ecologistas y al vecindario. Los municipios afectados de la zona se cuentan por decenas, entre los que sobresalen Loeches, Torres de la Alameda y Villalbilla. En ellos se instalarán más de seis millones de paneles fotovoltaicos que ocuparán unas 5.560 hectáreas y que podrían generar 3.000 megavatios (MW) de potencia. Las subestaciones eléctricas de esta comarca han ayudado a que florezcan en ella CPD como el de Nabiax, en Alcalá de Henares, que presta servicio a Telefónica, con 23 salas de 681 metros cuadrados y 50 MW de potencia instalada. En septiembre, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, colocó

la primera piedra de la expansión del centro, y subrayó que la región es líder en España con 41 centros de datos en funcionamiento, 15 en construcción y 40 más previstos. Esta infraestructura, anuncian, contará con un suministro totalmente renovable y un sistema de refrigeración que empleará el mismo volumen de agua de la red durante su vida útil. Tendrá capacidad para 80 MW y estará destinada a acoger soluciones de IA y servicios en la nube. “Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid queremos acompañar en estas inversiones para seguir prosperando”, destacó Ayuso. Microsoft, Nabiax, Adam y Vaultica son empresas que han elegido la zona este de la región para levantar sus CPD. “El Corredor del Henares es un oasis eléctrico que posibilita la proyección de unos 10 nuevos centros de datos cuya potencia individual supera los 50 MW, aunque algunos superarán los 350 MW, como el de Loeches y el de Torres de la Alameda”, ilustra Manuel García, investigador predoctoral del CSIC y la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en antropología económica cifra en 4.100 los MW proyectados en la región (el 30% se instalarían en esta comarca). La potencia instalada de estos

centros de procesamiento de hiperescala no es la que realmente utilizan; eso sería su máximo. Los cálculos indican que lo hacen en un 75%. En comparación con la energía de un hogar, donde la electricidad tampoco está continuamente en funcionamiento, la potencia de un CPD equivale a decenas de miles de viviendas. El colectivo No Centros de Datos Aragón lo cuantificó con uno de Amazon que utiliza una potencia de 2.775 gigavatios/hora al año. Eso equivaldría a 90.000 hogares en potencia instalada, pero 793.000 si atendemos al consumo real. Las investigaciones apuntan a que el 70% de los procesos que ocurran en estos centros estarán ligados a la IA, según indica García. “La gente empieza a tomar conciencia del impacto real que tendrá en nuestras vidas. Se empieza a saber que estos centros tendrán impacto directo sobre el mundo rural y las zonas periféricas de las capitales”, afirma. Para Juan Miguel Salvador, miembro de Ecologistas en Acción Alcalá de Henares, se trata de una industria extractiva que, además de drenar los recursos naturales de la zona, como el agua, genera impactos para beneficio de compañías como Google, Microsoft, Amazon y Meta: “Aumen-

tará la sensación de isla de calor, producirán ruido y vibraciones y saturarán la capacidad de la red eléctrica, por lo que dificultarán la instalación de otro tipo de industrias y servicios en la zona”. En este sentido, la necesidad de una potencia elevada provoca la proliferación de macroplantas fotovoltaicas en la Alcarria alcalaína. “Son energías renovables que no vienen a descarbonizar nada, sino a apuntalar un nuevo consumo”, comenta el ecologista. Henares en Verde, la asociación de afectados por estas plantas solares, calcula en 2.974 los MW instalados y en 5.560,27 las hectáreas en las que se instalarían 6.008.993 paneles solares. “Supone la sustitución de la actividad agrícola por la industrialización del campo”, apunta Salvador.

Loeches, Villalbilla y Torres de la Alameda acogerán los paneles en 5.560 hectáreas

“La industrialización del campo”, define un miembro de Ecologistas en Acción

Henares en Verde intenta frenar la expansión de las plantas fotovoltaicas mediante recursos judiciales. “En muchos casos llegamos tarde, porque nuestros ayuntamientos ni nos informaron de lo que iban a hacer ni realizaron alegaciones”, comenta Marta, vecina de Villalbilla y tesorera de la asociación. Esperan que los tribunales les den la razón después de exponer que en algunos casos ya han caducado ciertos permisos, se dan incompatibilidades urbanísticas y el informe es desfavorable en relación a su declaración de utilidad pública.

Expropiaciones de tierras

En su mayoría, la instalación de estas macroplantas ha sido declarada de utilidad pública, por lo que son muchos los vecinos de la zona que se enfrentan a expropiaciones de tierras que llevan décadas en sus familias. Mercedes vive en Torres de la Alameda y se podría quedar sin las tres fincas de casi 60 hectáreas en las que cultivaba cereal y más de 70 olivos que plantó su tatarabuelo. “Nos daban 4.000 euros por todo”, dice. Hace seis meses que recibió la carta de expropiación. “Esto va a fastidiar a todo el pueblo. Nos quieren rodear de placas. Cuando me asome a la ventana solo verá un mar negro de placas”, vaticina. La necesidad de los centros de datos es imprescindible si una región en concreto quiere poseer soberanía tecnológica. Así lo señala José Antonio Portilla, secretario general del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, quien no considera probable que este tipo de soluciones las pudiera plantear una empresa pública. Pero recalca aspectos cruciales: la garantía de los derechos de los usuarios y que los servicios públicos alojados en ese centro estén adecuadamente cubiertos, además de que la regulación impulse la innovación y la capacidad competitiva. “Si no, nos quedamos muy atrás”, señala el director de la cátedra ISDEFE de la Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá (UAH). Por su parte, el concejal alcalaíno de Innovación Tecnológica, Víctor Cobo, apunta que para la ciudad “supone una oportunidad de atraer inversión, innovación y actividad económica vinculada a sectores de futuro”. El Ayuntamiento asegura que analiza el consumo eléctrico e hídrico de los CPD “con el mismo rigor que cualquier otro impacto asociado a una gran infraestructura”. Por otra parte, la generación de empleo, tan cacareada por empresas y administraciones, se concentra en la construcción de la infraestructura, dice García. La ampliación del CPD de Nabiax en Alcalá empleará a 1.000 trabajadores durante las obras, según Ayuso. En estos casos, apenas existen datos sobre los puestos de trabajo que generarán durante su operatividad. “No se sabe si son presenciales o telemáticos, hasta qué punto especializados o cuánto durarán en una industria camino de automatizarse”, detalla García.